

APOLINAR DÍAZ CALLEJAS

Colombia bajo doble fuego: crisis interior y señorío de EE UU

La crisis política que padece Colombia en el umbral del siglo XXI ha estado a punto de expulsar del poder al presidente Ernesto Samper, acusado por una coalición derechista y conservadora de financiar su campaña electoral con dinero del narcotráfico. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia exculpó al Presidente. Por su parte, el papel jugado por EE UU en la vida política colombiana ha evidenciado su pragmatismo económico y comercial a la hora de tratar el problema del narcotráfico, absteniéndose de participar activamente en la lucha contra el consumo de drogas. El clima de violencia que vive Colombia en la actualidad es la herencia de la crueldad experimentada a mediados del presente siglo, agravada por el discurso de grupos conservadores y la Iglesia católica contra los liberales.

De crisis en crisis. Violencia e institucionalidad

Colombia vive una nueva crisis política al finalizar el siglo XX. La peor de su historia, afirma la convergencia de la derecha liberal-conservadora, empresarial y terrateniente que quiso tumbar al presidente Ernesto Samper. Igual se ha dicho en el pasado. En cada momento de dificultades políticas internas algo no sólo frecuente sino bastante común en la historia social y política colombiana, como en la de cualquier país subdesarrollado- siempre ha estado presente esa frase de cajón. La han pronunciado quienes han tenido en sus manos los factores de poder a lo largo de la historia del país y querían empujar cambios favorables a sus propósitos políticos, sociales y ansias de

Apolinar Díaz Callejas es Doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Ha sido profesor universitario, gobernador, ministro del despacho, senador de la República. Es miembro de la Academia Colombiana de Historia, de la Comisión Andina de Juristas y de la Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos y autor de diversos libros, entre otros: *El lema respice pollum y la subordinación en las relaciones con Estados Unidos, Colombia-Estados Unidos: entre la autonomía y la subordinación y Problemas globales y América Latina.*

gobierno, sin tener que dar explicación ni solución a viejos e insatisfechos problemas de desigualdad social. De ese modo, se evade el examen de la realidad de que en Colombia no ha terminado de institucionalizarse el Estado nacional y conviven estructuras sociales de estirpe colonial en la concentración de la tenencia de la tierra, del ingreso y de las oportunidades de ascenso, progreso social y tecnológico y en las relaciones de trabajo en muchas regiones del país.

La crisis política y de los partidos, común al mundo de la posguerra fría, coincide con una ofensiva derechista y neoliberal. Así, al concluir el 16 de diciembre de 1996 las deliberaciones ordinarias del Congreso de la República, en las que fue aprobada una de las más duras leyes del mundo para expropiar en favor del Estado los bienes adquiridos durante los últimos 20 años con dinero del narcotráfico o de origen ilícito- como parte de la ofensiva derechista, en la que la prensa y demás medios de comunicación se convirtieron en abanderados de la ética y del libre juego de las fuerzas del mercado- arreciaron los ataques contra el Congreso, la clase política y los partidos políticos.

En Colombia, la concentración del poder económico y político, además del fenómeno moderno del control monopolista y la manipulación antidemocrática de los medios masivos de comunicación, amenazan la seguridad misma de su tradicional democracia política.

Colombia tiene modalidades muy particulares en el conjunto de América Latina. Entre otras que, pese a todos sus problemas y al subdesarrollo, ha logrado mantener a lo largo de su historia una democracia representativa, aunque de estructura jurídica autoritaria por la posibilidad de abuso en la utilización del recurso del estado de sitio, con excepcionales y transitorias dictaduras personales o militares.¹ Otros rasgos son un sistema de elecciones como fuente de los poderes públicos, que a lo largo de los años se ha ido perfeccionando por consenso nacional, separación real de las ramas de los poderes públicos y un funcionamiento institucional estable en comparación con el resto de Hispanoamérica.

Hay, sin embargo, una debilidad histórica del Estado por su fractura y, en cierto modo, privatización regional. Esta vulnerabilidad se manifiesta en la incapacidad durante decenios para formular una política militar coherente frente a la violencia partidista (1947-1957) y de la guerrilla, habiendo recurrido en 1964, en el Gobierno del conservador Guillermo León Valencia, al auxilio de comités de autodefensa particulares que practicaban directamente la represión y la venganza privadas. Fueron prohibidos por el Gobierno liberal de Virgilio Barco en 1987, pero, bajo distintas formas, han reaparecido al aumentar las acciones y secuestros de las guerrillas. Esta es una prueba del vacío del Estado, de su incapacidad para utilizar el privilegio de ser el depositario del derecho al uso de las armas para mantener el orden institucional y político.

¹ Colombia sólo ha tenido cuatro golpes de Estado desde la Independencia hasta el cierre del siglo XX. Los Gobiernos dictatoriales así surgidos fueron muy breves.

No obstante, la misma crisis política de 1995 y 1996, con acusaciones al presidente Samper de haber aceptado o autorizado personalmente el ingreso de dinero del narcotráfico para su campaña electoral- que él negó y de lo que fue absuelto por la Cámara de Representantes, su único juez conforme a la regla tradicional consagrada en la Constitución Nacional de 1991, que reprodujo el texto de la de 1886- se pudo resolver dentro del marco de tales normas jurídicas preexistentes. Ello pese a la abierta convocatoria de la alianza derechista al quebrantamiento del orden constitucional, que llevó a algunos de sus miembros a gestionar ante el embajador norteamericano, Myles Frechette, el apoyo a un golpe de Estado, según él mismo informara a la prensa. Otros adversarios de Samper hicieron agresivas campañas internacionales contra su Gobierno, buscando su bloqueo comercial y político por la Administración de Clinton.

Pocos países de Hispanoamérica o del mundo habrían podido manejar semejantes acciones de la oposición y la crisis dentro del orden jurídico vigente, sin cambiarlo, sin legislación decretada para ello y sin afectar las libertades individuales y garantías constitucionales y sociales. La única ley especial aprobada por el Congreso para aplicar durante el informativo al presidente Samper, fue una que, a iniciativa suya, permitió suspender la "reserva sumarial", que es norma universal en materia penal, para en cambio hacer públicas todas las diligencias y pruebas, permitiendo el acceso a ellas a los medios de comunicación y al conjunto de los ciudadanos. La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de diciembre de 1996, declaró de plena y definitiva validez jurídica y cosa juzgada la decisión de la Cámara de Representantes en favor de Samper.

La historia de Colombia registra muchas crisis, entre ellas, como en España, decenas de guerras civiles generales y regionales en el siglo XIX entre elites liberales y conservadoras. Estas últimas apoyadas por una Iglesia Católica dogmática y reaccionaria. El Obispo Ezequiel Moreno y Díaz, recientemente beatificado, para animar a las huestes conservadoras decía: "el liberalismo es pecado, enemigo fatal de la Iglesia y del reinado de Jesucristo".² Estas prédicas y las inevitables excomuniones y condenas a los liberales a ser hervidos en las pilas del infierno, en un país y una época en que el analfabetismo era del 80 al 90% y, además, con relaciones de trabajo serviles, no sólo sustentaban al Partido Conservador sino que sembraban el odio partidista y religioso.³

*La historia de
Colombia
registra
muchas crisis,
decenas de
guerras
civiles en el
siglo XIX
entre elites
liberales y
conservado-
ras.*

² Marco Palacios, *Entre la legitimidad y la violencia. Colombia 1875-1994*, Ed. Norma, Bogotá, 1995, p. 107.

³ Nada muestra mejor la indebida manipulación política de la religión en Colombia que lo ocurrido en la reciente Convención Nacional de un sector del Partido Conservador (octubre de 1996), el que sigue a los herederos de los ex presidentes Laureano Gómez y Misael Pastrana, en la alborada del siglo XXI. En la canción de ritmo popular "ballenato", compuesta para el evento y para próximas campañas electorales, se dice que Jesucristo es conservador. Las jerarquías de la Iglesia han guardado silencio.

Una de las principales causas históricas y psicosociales de la crueldad de la violencia política es herencia de prácticas atroces, en lo que se ha llamado “la violencia” de 1946-1957.

Christopher Abel,⁴ investigador inglés, subraya el empeño del Partido Conservador en insertar como uno de sus componentes a la Iglesia Católica. En algunas etapas históricas lo logró. En otras, como en el período antiliberal de la violencia de 1946-1957, arrastró a la mayor parte de esa Iglesia pero a costa de dividirla. Abel trae algunos ejemplos. En 1913, el párroco de Pueblorrico decía en el púlpito: “Hombres y mujeres que me escuchais, tened presente que el parricidio, el infanticidio, el hurto, el crimen, el adulterio, el incesto, etc., etc., son menos malos que ser liberal”. Durante las elecciones de ese año, se encargó a los párrocos telegrafiar a Medellín los resultados electorales. El de Concordia informó: “católicos 240, luciferistas 83”. El de Pueblorrico, escribió: “católicos 435, rebeldes contra Dios y su santa Iglesia, 217”.

El infierno de la violencia

Una de las principales causas históricas y psicosociales de la crueldad de la violencia política, que emplean las guerrillas y contraguerrillas colombianas y elementos de la propia fuerza pública al concluir el siglo XX, es herencia de prácticas atroces, en lo que se ha llamado “la violencia” de 1946-1957. Ésta fue desatada desde gobiernos conservadores minoritarios contra el Partido Liberal, que tenía la mayoría, en la que se estima hubo 300.000 muertos. En carta del 30 de mayo de 1952 el jefe del Partido Liberal, más adelante uno de los más notables presidentes de Colombia, Carlos Lleras Restrepo,⁵ denunciaba al jefe del Gobierno conservador, Urdarneta Arbeláez, lo ocurrido en el municipio de El Líbano: “Centenares de campesinos inocentes, hombres, mujeres y niños fueron sacrificados sin piedad, en una horrenda e inútil orgía de sangre. Plantaciones, casas e instalaciones de trabajo fueron destruidas y saqueadas”. En esa “violencia”, 396.648 campesinos fueron despojados de sus tierras,⁶ se desató la corrupción administrativa y social⁷ que todavía pervive y los protagonistas del conflicto recurrieron a las peores y más feroces formas de criminalidad, desprecio y ultraje a la dignidad del ser humano.

En tal frenesí de crímenes colectivos e individuales, que se desarrolló en zonas rurales, en particular en el llamado “eje cafetero” formado por las más importantes zonas de cultivo del café de los departamentos de Antioquía, Caldas, Quindío, Risaralda, Valle y Tolima- los de mejores ingresos, condiciones de vida y servicios sociales y comunitarios del campesino- la degrada-

⁴ Christopher Abel, *Política, Iglesia y Partidos en Colombia*, FAES-Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 1987.

⁵ Carlos Lleras Restrepo, *De la república a la dictadura*, Ed. ARGRA, Bogotá, 1995, p. 397.

⁶ Paul Oquist, *Violencia, conflicto y política en Colombia*, Biblioteca Banco Popular, Bogotá, 1987, p. 307.

⁷ El escritor y dirigente público Otto Morales Benítez encontró en esos hechos el origen de la corrupción en Colombia.

ción de unos y otros llevó a prácticas salvajes. Una de ellas era hacer la cesárea a la madre embarazada con un machete, extraerle el feto, introducirle un gallo y luego coserla. Otro de los actos consistía en hacer una incisión con arma cortante en el cuello, debajo del maxilar inferior, por la cual pasaban la lengua de la víctima, que quedaba colgando como una corbata ensangrentada.⁸ En los crímenes contra los niños, en la citada población de El Líbano, los cabos de la policía política de la época arrojaban al aire a recién nacidos y los recibían en la punta del yatagán.⁹ Esta escena se vivió de nuevo, cuando en un asalto guerrillero a una escuela en Apartadó, región de Urabá, en septiembre de 1996, a la vista de los otros escolares, uno de esos “revolucionarios” cortó de un tajo la cabeza a Jairo Ortega, un niño de 12 años, luego la ensartó en la punta del machete y la exhibió desafiante y cínico a los alumnos de la escuela.

Otro efecto social y de comportamiento colectivo en 50 años de violencia rural es la convivencia con tan feroces delitos y su rápido olvido. Ha sido el reinado de la impunidad absoluta. La sociedad colombiana, la civil y la armada de todo origen, ha cohabitado con esas formas de criminalidad.

La degradación creciente de la violencia y confrontación guerrilla-contra-guerrilla-grupos de defensa privada ha llevado a que, como respuesta a los secuestros de la guerrilla,¹⁰ a sus masacres contra exguerrilleros- especialmente en la región de Urabá- y a la extorsión y el terrorismo, las contraguerrillas y grupos llamados de autodefensa se hayan lanzado a secuestrar y a asesinar no sólo a quienes consideran auxiliares o simpatizantes de esas agrupaciones, sino también a familiares de los dirigentes guerrilleros más conocidos. Ha empezado así una *vendetta* y oleada de crímenes mutuos de “ojo por ojo” y “diente por diente” que está conduciendo, como ocurrió en el pasado y sigue ocurriendo en varios países después de guerras civiles o confrontaciones armadas internas, a una avalancha delictiva sin límites morales o éticos, indiscriminada y sádica.

*Un efecto
social y de
comporta-
miento
colectivo en
50 años de
violencia
rural es la
convivencia
con feroces
delitos y su
rápido olvido.*

⁸ Monseñor Germán Guzmán Castro; Orlando Fals Borda; y Eduardo Umaña Luna, *La violencia en Colombia*, Punta de Lanza, Bogotá, 1977, T. I, p. 131.

⁹ *Ibidem*, p. 227.

¹⁰ En 1995 hubo 1.068 secuestros denunciados a las autoridades: 244 de las FARC, 218 del ELN, 16 de disidencia del M-19, 28 de disidencia del EPL y una milicia popular. Subtotal de guerrillas: 507. Delincuencia común: 554. Paramilitares: 7. Subtotal de delincuencia común y paramilitares: 561. En 1996, hasta el 30 de noviembre, 1.022 secuestros, así: FARC 173, ELN 191, disidencia del M-19 cinco, disidencia del EPL 27, milicias populares 3, ERP 1. Subtotal de Guerrillas: 400, de delincuencia común: 605, de paramilitares siete. Subtotal de delincuencia común y paramilitares: 622. En esta misma fecha, 30 de noviembre de 1996, habían sido asesinadas 54 personas, 11 se fugaron, 205 fueron rescatados, 15 liberados por presión, 309 liberados mediante negociación con los raptores, guerrilla o delincuencia común y seguían cautivos 416.

Fuentes: Programa Presidencial para la Defensa de la Libertad Personal y SIISEC. Es indicativo del nivel de criminalidad que en 1995 hubo 115 menores secuestrados y en 1996, hasta el 30 de noviembre, un total de 117.

El enriquecimiento fácil con el dinero del narcotráfico arrastró a muchos hijos y miembros de las altas clases rectoras del país.

La crisis y la injerencia del narcotráfico

La cuestión del narcotráfico tiene en Colombia dimensiones y connotaciones económicas y políticas no siempre presentadas con objetividad nacional e internacional. El enriquecimiento fácil con el dinero del narcotráfico no sólo abrió paso y notoriedad a hombres surgidos de las clases medias y bajas, que alcanzaron grandes fortunas y poder en sus regiones, sino que a su vez arrastró a muchos hijos y miembros de las altas clases rectoras del país. Éstos convivieron y participaron en negocios con los barones de la droga, como el de vender propiedades urbanas y rurales, obras de arte y dignidades deportivas y sociales a precios tan elevados, fuera de lo común y de su valor normal, que resultaba manifiesto que negociaban a sabiendas con narcotraficantes. El dinero de ese ilícito negocio penetró hondamente en sectores como la construcción y propició una especie de contrarreforma agraria por la venta de sus tierras, las mejores de Colombia, que a precios inimaginables hicieron sus propietarios a los narcotraficantes, con pleno conocimiento de que lo eran.

Se estima que cinco millones de hectáreas de las mejores tierras colombianas dedicadas a la ganadería, compradas por narcotraficantes, podrán utilizarse por gestión del Gobierno de Samper- que logró la aprobación de la ley respectiva- a la reforma agraria, la reinstalación de más de 700.000 campesinos desplazados del campo por la confrontación armada y para comunidades indígenas. Tendrán privilegio en las adjudicaciones los desplazados por la violencia y los campesinos involucrados en programas de erradicación de cultivos ilícitos.

Entre la tragedia de la violencia y la vitalidad de Colombia

Colombia vive una situación de confrontación armada interna, con legitimidad o sin ella, según las convicciones de quien califica, difícil de concluir por un camino diferente al acuerdo político, dada la extensión del país, cruzado por tres cordilleras y con gran parte de su territorio cubierto de selvas, sin vías de acceso. Al mismo tiempo, operan otros elementos, como las relaciones guerrilla-narcotráfico, contraguerrillas, violencia del propio narcotráfico, grupos de defensa privados, delincuencia común y la natural y legítima fuerza pública propia de todo Estado de derecho, en cuyo seno, no pocas veces, componentes suyos incurren en violaciones de los derechos humanos, pese a los esfuerzos evidentes para sanearla y retirar los elementos indeseables o viciados.

Cualquier persona desprevenida podría llegar a la conclusión de que Colombia es el infierno en la tierra, invivible, sin atracción alguna para el viajero o para la inversión nacional o extranjera, sin esperanza. Incluso han aparecido ya los politólogos y científicos sociales nativos que hablan de que "Colombia es una nación inviable". Lo que no han dicho es si como consecuencia de ello debe ser disuelta y anexionada a una potencia extranjera.

Contrariamente a todos esos juicios fatalistas de disolución nacional- sin desconocer la existencia de problemas y el hecho de ser un país subdesarro-

llado con todas las implicaciones que ello tiene, que padece las dificultades económicas del mundo-, Colombia es sin embargo el país de América Latina de mayor estabilidad política, con la más larga democracia liberal representativa y con la única economía que no retrocedió en la crisis general de la década de los ochenta. Su notable estabilidad se mantuvo pese a los efectos dañinos que heredó el Gobierno de Samper, especialmente en los sectores agrarios, metalúrgicos y textiles, de una apertura neoliberal hecha en la alegría de una mala fiesta de imitación de otras experiencias y de obediencia a los teóricos de las nuevas hegemonías mundiales.

Bajo el Gobierno de Samper ha crecido la inversión extranjera de Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, España, Chile y otros países. Cuando los titulares de prensa y las declaraciones de los integrantes de la convergencia derechista anunciaban y casi pedían sanciones unilaterales de la Administración de Clinton contra Colombia y pronosticaban el hundimiento total del país, fuga de capitales y pérdida de credibilidad internacional, Colombia fue el único país de América Latina en emitir y colocar en operaciones de un solo día bonos del Estado a 20 y más años en los mercados financieros y Bolsas de valores de Nueva York, Tokio y la Unión Europea, por más de 2.000 millones de dólares. Como arma contra el Gobierno, algunos periódicos publicaban esas informaciones y las relativas al aumento de la inversión extranjera casi escondidas.

El historiador norteamericano David Bushnell, ha manifestado: “los colombianos han demostrado su capacidad para recuperarse de situaciones peligrosas y terribles y continuar sus actividades cotidianas en circunstancias que al observador extranjero parecerían desesperadas. La habilidad para arreglárselas es ciertamente uno de los rasgos para incluir en cualquier modelo fiable del carácter nacional”.¹¹ Bushnell indica que los Gobiernos colombianos dirigieron la economía con moderación y habilidad técnica, lo cual atribuye al sistema político mismo. Señala que Colombia sobresalió en América Latina por el relativo éxito en el manejo de la deuda externa. Además, expresa, en coincidencia con otro historiador norteamericano, Charles Bergquist, que “Colombia no se adapta a los estereotipos y modelos usados convencionalmente en las discusiones sobre América Latina. Después de todo, ¿qué puede hacer un latinoamericano con un país donde los dictadores militares son prácticamente desconocidos, donde la izquierda ha sido congénitamente débil y donde fenómenos como la urbanización y la industrialización no desencadenaron movimientos populistas de consecuencias duraderas?”. Agrega Bushnell que “Colombia es tal vez el más típico de los países de la región, con su larga secuencia de guerras entre liberales y conservadores, su retrógrado clericalismo y su radical anticlericalismo, todo en un contexto de estancamiento socioeconómico”.¹²

*“Los
colombianos
han
demostrado
su capacidad
para
recuperarse
de situaciones
peligrosas y
terribles y
continuar sus
actividades
cotidianas en
circunstancias que
parecerían
desesperadas.”*

¹¹ David Bushnell, *Colombia, una nación a pesar de sí misma*, Planeta, Bogotá, 1996, p. 17.

¹² *Ibidem*, p. 16.

Durante algo más de dos años y medio hubo una verdadera guerra de las galaxias de los medios masivos de comunicación nacionales contra el presidente Samper.

La guerra de las galaxias

Durante algo más de dos años y medio (mayo/junio de 1994 - diciembre de 1996) hubo una verdadera guerra de las galaxias de los medios masivos de comunicación nacionales contra el presidente Samper. Conocidas figuras de la veterana “mano negra anticomunista”, personajes del más rancio y mañoso clientelismo electoral conservador y de sectores liberales, unas pocas sotanas arzobispales, la burocracia directiva de gremios industriales, del comercio y la banca, así como grupos de terratenientes y ganaderos- de los cuales muchos formaron parte de los mandos de la campaña presidencial conservadora del señor Pastrana-, periodistas liberales que votaron por éste- alineándose desde antes de las elecciones de junio de 1994 contra el nuevo Gobierno liberal-, noticieros de la televisión y la radio martillaron todos los días a los colombianos con su presentación de los hechos, o de lo que ellos imaginaban eran o debían ser, para crear una opinión que exigiera la renuncia del Presidente.

El *Washington Post* del 21 de julio de 1996, en un reportaje sobre el ex director de la DEA en Colombia, Joe Toft, despejó uno de los más graves episodios de la actual crisis política colombiana, al confirmar que la campaña del conservador Andrés Pastrana pidió la intervención norteamericana para tratar de influir en la votación. Las gestiones de grupos colombianos para la intervención estadounidense continuaron. El propio embajador Myles Frechette lo reveló a la prensa. A la pregunta sobre si un alto oficial del Ejército planteó la posibilidad de un golpe de Estado, respondió: “No fue un alto funcionario militar, fueron civiles que se acercaron a mí en el mes de agosto de 1995 para sugerir un golpe de Estado, un pequeño golpe, y les dije que de ninguna manera, que se olvidaran, que si intentaban cualquier cosa de esa índole mi Gobierno tomaría todas las medidas posibles para demostrar su posición”.¹³

Las orejas del lobo

El narcotráfico ha tenido una notable incidencia en la desbarajuste social y la corrupción política, en especial a raíz de la apertura neoliberal indiscriminada y sin salvaguardias iniciales para preparar y acomodar a los productores colombianos a la competencia internacional, tal como han hecho las grandes potencias económicas para proteger su propia producción.

En septiembre de 1996, el diario bogotano *El Espectador* promovió un *Foro Salmón* sobre “El futuro de las Relaciones Comerciales con Estados Unidos”. Participaron empresarios colombianos y extranjeros y el embajador Myles Frechette, el “Virrey”, según el comentario usual. El diplomático dijo allí: “Mi Gobierno insta enfáticamente al Gobierno de Colombia para que abra lo más ampliamente posible el mercado de las telecomunicaciones bajo la ley colombiana y cambiar la ley, si es necesario, para adoptar reglas adecuadas

¹³ *El Tiempo*, Bogotá, 13 de agosto de 1996.

y efectivas de competencia”. Pidió lo mismo para el petróleo, la energía y la agricultura.¹⁴ El lobo dejaba ver sus orejas. La presión contra Colombia con el pretexto del narcotráfico tenía otra carta debajo de la mesa: obtener ventajas económicas y comerciales.

Para que no hubiera dudas, en el mismo evento, Michael Skol, consultor internacional con más de 30 años de experiencia en el Departamento de Estado, cerró el círculo y el acto diciendo: “yo creo que sí vienen sanciones comerciales contra Colombia y, con ellas, una tragedia para el sector privado colombiano”. Skol añadió: “No hay simpatía de nuestro Congreso hacia ustedes (...), las sanciones son para dañar”- argumentó- “al mostrar que lo que busca su país es golpear y sentar un precedente”. Criticó al sector privado colombiano que “no ha hecho pública su desaprobación por el tráfico y producción de drogas”, que en Estados Unidos interpretan como que no quiere acabar con ese mal.¹⁵ Fue una reprimenda a los empresarios empeñados sólo en tumbar a Samper, creyendo que eso los protegía de la furia gringa. En cambio, EE UU, siendo el mayor consumidor y beneficiario financiero, se negó a participar en la Cumbre Mundial Antidrogas reunida en Cartagena de Indias en abril de 1996, para examinar el problema y la lucha contra el consumo.

El proyecto autoritario y antidemocrático

Durante el período agudo de la crisis política, cuando el juez constitucional competente, la Cámara de Representantes y su Comisión especial de Acusaciones tramitaban las denuncias del Fiscal contra Samper, la convergencia derechista y sus principales figuras políticas, tanto liberales como conservadoras, de la Iglesia y los gremios empresariales, formularon propuestas concretas para subvertir el orden jurídico y constitucional. Una apuntaba que la Cámara de Representantes y el Senado de la República estaban impedidos para cumplir sus funciones constitucionales, porque la mayoría de sus integrantes pertenecía al Partido Liberal, agrupación que había elegido a Ernesto Samper presidente. Andrés Pastrana propuso “jueces independientes”.

Estaba implícita en tales planteamientos la idea de, por un lado, eliminar a la mayoría política del Congreso- aunque obviamente no podría funcionar con la minoría- y/o, por otro lado, crear un tribunal especial *de hecho* que suplantara al Congreso en su función de investigar y decidir sobre las acusaciones al Presidente. Para uno y otro caso era indispensable un golpe de Estado que clausurara el Congreso, despojara de sus competencias a los parlamentarios liberales y de otros partidos que apoyaban a Samper y otorgara todos los poderes a la minoría congresista superviviente como supuesto cuerpo legislativo que no obedecería al Presidente constitucional, también derrocado, sino a la junta o congregación de notables de la coalición derechista. Tal vez, por el carácter parroquial y municipalista de semejantes pro-

¹⁴ *El Espectador*, Bogotá, 21 de septiembre de 1996.

¹⁵ *Íbidem*.

puestas, algunos prefirieron el camino directo de gestionar el golpe de Estado con visto bueno de EE UU.

Frustrada la idea de derribar a Samper e impotente para dar un golpe de Estado, la convergencia derechista se resignó a que cumpliría su período presidencial, y la emprendió entonces contra su ministro del Interior, Horacio Serpa Uribe, a quien se considera con posibilidades de ser elegido presidente de la República, por su ejemplar valentía y lealtad, así como por su larga tradición democrática. La derecha multipartidista ha convocado a unirse contra él. En Colombia, esta clase de incitaciones han tenido históricamente consecuencias trágicas, incluido el asesinato.

La ofensiva contra Serpa Uribe se materializó en una moción de censura ante el Congreso. Durante su trámite, el 6 de diciembre de 1996, en una sesión que duró 17 horas, transmitida íntegramente por televisión, el proyecto derechista quedó al descubierto, pues los acusadores, miembros de la minoría antiserpista, destaparon todas sus cartas: atacaron el proceso de paz y las negociaciones con la guerrilla para una solución política negociada de la actual confrontación armada. Además, se agredió y ofendió a los "reinsertados", es decir, a los ex guerrilleros, a los que hicieron la paz y se reincorporaron a la vida ordinaria del país, y se acusó a Serpa y al Gobierno de Samper de darles apoyo y trabajo. Esto último es cierto, porque los empresarios privados que hablan de "paz" y tienen su discurso al respecto, no dieron un solo empleo a esos reinsertados, pues prefieren las contraguerrillas y grupos de autodefensa privados. Por ello, ha sido el Gobierno el que ha asumido la empresa de reincorporar a los antiguos guerrilleros.

Otro de los ataques al ministro Serpa fue porque en su ministerio trabajaba la hermana o un pariente cercano de un dirigente guerrillero. La tesis, dicha en el viejo lenguaje anticomunista, armoniza con la ideología de la "guerra total" de que los familiares de un guerrillero son responsables de los actos de éste. Los ataques se dirigieron también contra el centro de investigaciones CINEP y contra los sacerdotes jesuitas que lo dirigen, contra la Comisión Colombiana de Juristas y los abogados que la integran, contra las ONG de las comunidades negras e indígenas y las "mingas", que son formas históricas de organizar su trabajo comunitario. Todo ello era subversivo, comunista, guerrillero. El país pudo constatar directamente el discurso reaccionario, agresivo y autoritario de la convergencia derechista.

Pero el fracaso de la derecha fue total. El Congreso, de forma aplastante, con votos liberales, conservadores e independientes, derrotó la moción de censura al ministro Serpa Uribe. El discurso político de más de dos años en los medios de comunicación y en diversos escenarios nacionales fue materializado en esa histórica sesión. Su primer componente es el antipartidismo, no sólo en cuanto a la necesidad de desideologizar los partidos, sino también de despolitizar la política en beneficio de una supuesta sociedad civil que encaje en la concepción Reagan¹⁶ de reducir el Estado y dejar el campo al

¹⁶ Enriqueta Cabrera, *Respuestas a Santa Fé II*, El Día en libros, Publicaciones Mexicanas S.C.L., México D.F., 1989.

libre juego de las fuerzas del mercado, bajo el concepto de que capitalismo es democracia y democracia es capitalismo. Ésta es la consecuencia del fin de la historia, pues todo está hecho con el capitalismo y ha llegado el fin de toda utopía. La política y las elecciones hay que hacerlas al margen de los partidos, por los portavoces de los gremios empresariales, organizaciones no gubernamentales y la mencionada sociedad civil. Todo ello bajo una clara regla autoritaria, que es la única justificación de la existencia del Estado para la sociedad civil reaganiana. De modo expreso se propuso el modelo autoritario de Fujimori.

El futuro inmediato

En los 15 meses finales del Gobierno de Samper, la sucesión presidencial y toda la cuestión política pasará en forma ascendente a un primer plano. Hay una evidente crisis de los partidos, igual que en el resto del mundo, que carecen de los grandes liderazgos que los caracterizaban en el pasado. Las causas son su propia crisis y los cambios institucionales introducidos por la Constitución de 1991- que desconcentró el poder político y administrativo en favor de las regiones-, la elección directa de alcaldes y gobernadores y la descentralización de recursos públicos y funciones del Estado. Por ello, la política y los partidos han vuelto a sustentarse en el poder de los líderes y organizaciones regionales y locales. Ésto ha elevado a la dirección nacional de los partidos a dirigentes provinciales que hacen la política nacional al estilo y hábitos de sus respectivas parroquias.

La oposición del sector del Partido Conservador que controla su dirección es de pura estirpe municipalista y parroquial, con la desventaja de que en 1997, hasta el cambio de Gobierno en agosto de 1998, la política estará marcada por gran alboroto y vocerío municipal. Sin embargo, Colombia estará en el noticiario universal y podrá mostrar si es capaz de acercarse a la gran meta de ser una democracia de los derechos humanos en la totalidad de su dimensión y contenido o si, por el contrario, cae en el "fujimorismo" criollo.